

AMPARO.

Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Donaciano Saldaña, contra el regidor de la asamblea municipal de Sombrerete, C. Porfirio Serrano, que condenó al quejoso á un mes de prision ó al pago de quince pesos de multa, por las faltas que cometió en la plaza de toros de Sombrerete.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que en ocurno de 1º del corriente, Donaciano Saldaña se ha presentado quejándose del C. regidor de la asamblea municipal de Sombrerete, Porfirio Serrano, quien la tarde del día 8 que presidió una corrida de toros en aquella ciudad, despues de concluido su encargo, tuvo á bien disponer se presentara el quejoso preso en el cuartel, por haberle impuesto una pena de un mes de prision ó quince pesos de multa, á consecuencia de una cuestion particular que durante la funcion tuvo el quejoso con el C. Rodrigo Castañeda; por lo que, considerando violada por el referido regidor, en su persona, la garantia que concede el artículo 16 de la constitucion, pide el amparo y proteccion de la justicia federal contra el atentado del funcionario que se abrogó facultades que competen únicamente á la autoridad judicial. Y pedido al funcionario responsable el informe que previene el artículo 9º de la ley de 20 de Enero de 1869, lo ha rendido manifestando, que el día 8 del corriente fué nombrado por la autoridad política del partido, para presidir la funcion de toros que tuvo lugar la tarde de ese dia, á la que asistió el quejoso como director de la música; que como en el intermedio varias personas pidieron que se tocara una pieza determinada, Saldaña, pasando al punto donde estaban los peticionarios, y faltando á la decencia y al decoro debidos á la concurrencia, á las con-

sideraciones individuales y al respeto á la autoridad, prorumpió en injurias contra las personas antes dichas, vertiendo palabras indecentes ó inmorales, y perturbando con ese hecho el órden público; por lo que, estando investido de las facultades neccsarias y siendo el hecho público, determinó castigarlo con la pena de que hace mérito el quejoso, dando inmediatamente órden al sargento de la guardia para que arrestara á Saldaña luego que cumpliera su compromiso con el público: y que al terminar la funcion y en el acto mismo de arrestar al quejoso, este le suplicó le permitiera dejar á su esposa en su casa y se presentaría preso en seguida; todo lo que aparece demostrado por las atestaciones de los CC. Pascual Quesada, Martin Echeverria, Manuel Menchaca y Miguel Sotomayor, segun el certificado del juez 2º de paz de Sombrerete de fojas 5 y 6.

Esto expuesto, es incuestionable que el C. regidor Porfirio Serrano, al recibir de la gefatura del partido el encargo de ir á presidir la funcion de toros que tenia lugar en la tarde del 8 del corriente, recibió tambien por delegacion las facultades administrativas de la primera autoridad política, para conservar el órden y castigar correccionalmente las faltas de los perturbadores, sin figura de juicio y en los términos que previene el reglamento económico político de los partidos, en cuyo artículo 67 está comprendida la determinacion dictada por el C. regidor Serrano, para corregir la falta del quejoso Donaciano Saldaña.

Y esta determinacion, dictada por el representante de la autoridad política de Sombrerete, ejerciendo una atribucion reconocida por la ley, no viola la garantia individual que la constitucion protege en el artículo 16; por que el 21 del mismo código, que deja á la autoridad administrativa la imposicion de penas correccionales, que expresamente determine la ley, ha sido obsequido en el presente caso por la autoridad competente, fundada en causa legal y con la

atribucion que le concede el reglamento referido.

En tal virtud y no encontrando violacion ninguna de las garantias individuales en el acto reclamado del C. regidor municipal de Sombrerete, Porfirio Serrano, que motiva este juicio, el promotor fiscal cree de justicia, y asilo pide al juzgado, con fundamento de los artículos 101 y 102 constitucionales y ley de 20 de Enero de 1869, se sirva fallar definitivamente negando el amparo solicitado, y condenar á Donaciano Saldaña como previene el artículo 16 de la expresada ley. Protesta lo necesario.

Zacatecas, veintisiete de Octubre de mil ochocientos setenta y uno.—*Jesus M. Lizcano.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Zacatecas, Noviembre siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por Donaciano Saldaña contra la Orden del regidor de la asamblea municipal de Sombrerete C. Porfirio Serrano, que lo condenó á un mes de prision ó al pago de una multa de quince pesos por faltas cometidas en una funcion de toros, que presidia el expresado regidor, considerando violada con el procedimiento la garantia que protege el artículo 16 de la Constitucion general.

Vistos, el informe de la autoridad, el pedimento fiscal, la citacion para sentencia y todas las constancias de autos.

Apareciendo: que el regidor C. Porfirio Serrano, obró conforme á las facultades que le concede el reglamento económico-político, fecha 5 de Mayo de 1852, en su artículo 67: que el uso de las facultades que tiene la autoridad política para castigar con prision y multas las faltas de policia, están autorizadas por la misma Constitucion general y son necesarias para la conservacion del Orden público y su ejercicio dentro de las facultades que concede la ley, no ataca

ni viola las garantias individuales, de conformidad con lo pedido por el C. promotor fiscal y lo dispuesto en la ley de 20 de Enero de 1869, sentenciando definitivamente este juicio, el juzgado declara:

1º Que la justicia de la Union no ampara ni protege á Donaciano Saldaña contra la Orden del regidor de Sombrerete C. Porfirio Serrano, que condenó al quejoso á un mes de prision ó al pago de una multa de quince pesos, por las faltas que cometió en una funcion de toros, por no haberse violado con la expresada Orden ninguna garantia individual.

2º No se impone á Saldaña la multa de que trata la ley, por su insolvencia.

3º Remítanse estos autos en revision á la Suprema Corte de Justicia; publíquese la sentencia en el periódico oficial del Estado y ságuense las respectivas copias para el Semanario Judicial. Hágase saber; librándose exhorto al C. Juez de 1ª instancia de Sombrerete, para conocimiento del interesado. El C. Juez de Distrito del Estado lo decretó y firmó. Doy fé.—Firmado.—*Manuel G. Solana.*—*Luis G. Uruvez.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Zacatecas por el C. Donaciano Saldaña contra el regidor de Sombrerete C. Porfirio Serrano, que lo condenó á un mes de prision ó al pago de quince pesos de multa por las faltas que cometió en la plaza de toros de Sombrerete, y

Considerando: que el C. regidor Serrano procedió en el caso dentro del círculo de sus facultades, se decreta:

Que se confirma la sentencia pronunciada en siete del actual por el juez de Dis-

trito de Zacatecas, que declara, que la justicia de la Union no ampara ni protege á Donaciano Saldaña contra la órden del regidor de Sombrerete, C. Porfirio Serrano, que condenó al quejoso á un mes de prision ó al pago de una multa de quince pesos, por las faltas que cometió en una funcion de toros, por no haberse violado con la expresada órden ninguna garantia individual, y que no se impone á Saldaña la multa de que trata la ley por su insolvencia.

Devuélvase sus actuaciones al juzgado de Distrito de que proceden con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes, publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*José Arceaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*M. Zavala.*—*Luis M. Aguilar.*—Secretario.

Son copias que certifico. México, treinta de Noviembre de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta.*—Oficial mayor.

COMPETENCIA.

Promovida entre el juez de 1ª instancia de Cholula al de 3º de lo civil de México, para conocer del juicio ejecutivo sobre pesos, iniciado por el C. Luis García contra el C. José Domínguez Díaz.

PEDIMENTO DEL C. FISCAL.

El fiscal dice: que de los autos que se tienen á la vista, resulta que el C. Luis García, se presentó ante el C. juez 2º de esta capital, demandó ejecutivamente á D. José Domínguez Díaz ante el notario D. Antonio Cam-

pos de la Vega; mas el demandado, por medio de representante, el Lic. D. Miguel Zárate, se presentó ante el juez en turno de 1ª instancia del tribunal del Distrito de Cholula, solicitando se iniciara competencia al referido juez 3º de México para conocer del juicio ejecutivo que el Lic. Luis García lo habia promovido á Díaz.

El juez de Cholula para apoyar su jurisdiccion alega, como razon decisiva, que el C. Domingo Díaz es labrador; infiriendo de ahí, que aun cuando la escritura otorgada ante el notario Campos de la Vega lo haya sido en México y entrañe una renuncia del fuero del domicilio, esa renuncia es de ningún valor ni efecto toda vez que las leyes 6 y 7 título 10º libro 11 de la Novísima Recopilacion prohíben expresamente al labrador que pueda hacer semejante renuncia.

Pero esta razon que en épocas legales hubiera sido decisiva, en la actualidad carece de importancia y en manera alguna debe ser atendida. Basta considerar atentamente nuestras instituciones actuales para comprender esa verdad. Cuando se promulgó esa ley, de que nos habla el juez del Distrito de Cholula, la legislacion de entonces reconocia y acataba una multitud de exenciones y privilegios; andando el tiempo esos privilegios, esas exenciones se fueron restringiendo, y hoy despues de publicada y sancionada nuestra célebre constitucion federal, han desaparecido por completo. Nuestros legisladores de 1857, convencidos de esa verdad, dirijieron al pueblo mexicano estas palabras remarcables: "*La igualdad será de hoy mas la gran ley en la Republica*: y en efecto, consecuentes con ese principio, establecieron como un artículo constitucional, que en el territorio de la República, *nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ninguna persona ni corporacion puede tener fueros*. Pero no solo la constitucion general reconoce ese principio de igualdad ante la ley, sino que á su vez lo han sancionado igualmente, como una de las